

MILITARES, POLITICA Y DESARROLLO NACIONAL

La politización –en su sentido más amplio, el del interés por los asuntos de la sociedad en la que se vive– de las fuerzas armadas es una necesidad imperiosa. Cada soldado debe tener plena conciencia de para qué empuña su arma; debe tener la formación histórica, política, económica y social que le permita discernir cuándo está sirviendo a los intereses de la nación y cuándo se convierte en mercenario de las minorías aliadas a intereses extranjeros.

Índice

- 3** Martín Balza y la “derechohumanización” de las FF.AA.
Gustavo Cangiano
- 9** “El peligro de politizar las fuerzas armadas”
Gustavo Cangiano
- 15** La represión durante el Proceso
Crítica de Gustavo Cangiano a Aníbal D’Angelo Rodríguez
- 23** Los militares en la política
Daniel N. Moser
- 33** La Argentina no tiene hipótesis de conflicto; tiene un conflicto
Guillermo Hamlin
- 36** Participación de los militares argentinos en el desarrollo industrial
Guillermo Hamlin
- 39** La idea del pueblo en armas, principio de una nueva concepción para la defensa nacional
Alex Obal
- 42** Tres décadas de desmalvinización, tres décadas de democracia colonial

Martín Balza y la “derechohumanización” de las FF.AA.

Gustavo Cangiano

CLARÍN PUBLICÓ, EL 2 DE DICIEMBRE DE 2010, UNA NOTA DE Martín Balza, jefe del ejército durante el menemismo y embajador en Colombia bajo el kirchnerismo, titulada “Aquel golpe con el que, por fin, el ciclo funesto se cerró”. La nota hace referencia al 20 aniversario del levantamiento carapintada del 3 de diciembre de 1990.

Con el párrafo final de su nota, Balza ayuda a que comprendamos mejor la significación histórica de su propia figura. Escribe: “El 3 de diciembre de 1990 es un punto de inflexión en nuestra historia política y la definitiva inserción de las fuerzas armadas en la democracia. Ese día empezó algo distinto”.

Efectivamente, la derrota del coronel Seineldín y de sus soldados católicos y nacionalistas fue la condición necesaria para que cuatro años más tarde, a través de la célebre “autocrítica” de Balza (y de operaciones de inteligencia que tuvieron como protagonistas a Horacio Verbitsky y al capitán Scilingo, entre otros), quedara formalmente consagrada la “derechohumanización” de las fuerzas armadas.

De la revolución a los derechos humanos

Los revolucionarios setentistas perseguían con sus luchas el objetivo de una Argentina socialmente justa y nacionalmente emancipada. Algunos creían que el socialismo nacional resumía esas aspiraciones. Otros, en cambio, apostaban a un socialismo de matriz guevarista, maoísta o trotskista. Finalmente, estaban quienes creían que era el justicialismo el encargado de canalizar las fuerzas sociales que pugnaban por los objetivos emancipatorios.

Todavía está pendiente el necesario debate entre esas diferentes alternativas, pero, en cualquier caso, lo que el campo revolucionario en su conjunto tenía claro era que la lucha no se libraba por la “democracia” ni por los “derechos humanos”. Con toda su

grandilocuencia, esas palabras significaban, concretamente, bien poco: eran una especie de comodín semántico que servía tanto “para un barrido como para un fregado”. Invocándolas, los imperialistas estadounidenses, por ejemplo, habían arrojado dos bombas atómicas sobre ciudades indefensas de Japón, cuando la guerra ya estaba terminada y los “demócratas” y “derechohumanistas” argentinos, al igual que los de otras partes del mundo, tanto de “izquierda” como de “derecha”, habían salido alborozados a festejar.

¿Qué podían significar, entonces, los “derechos humanos”, si en su nombre los imperialistas realizaban las acciones más monstruosas? ¿No estaba claro el sentido “ideológico” —es decir, encubridor— que tenía su invocación? Y si ello era así, ¿no correspondía al pensamiento socialista y revolucionario batallar para descorrer ese velo ideológico y mostrar la realidad que oculta, en vez de ponerse al servicio de los encubridores?

Sin embargo, luego del derrocamiento del gobierno peronista en 1976 y de la entronización de una feroz dictadura contrarrevolucionaria, se produjo un fenomenal retroceso en la conciencia colectiva. Quienes hasta ayer explicaban que la verdadera disyuntiva que se presentaba a los argentinos era “liberación o dependencia”, ahora enarbolaban la consigna “democracia o dictadura”. Resultaba conmovedor ver a ex partidarios de la lucha armada, a gente que había leído todo Lenin o todo Trotsky, quejarse porque el aparato estatal oligárquico-imperialista (y sus colaterales paraestatales) no había respetado sus “derechos humanos”, había practicado detenciones “ilegales” y había, además, aplicado toda clase de tormentos físicos y psíquicos a los enemigos.

Uno se pregunta todavía hoy: ¿qué cree esta gente que las clases dominantes, cuando “las papas queman”, hacen con quienes desafían su dominación? ¿Creen, acaso, que existe algún precepto constitucional, algún tratado internacional o alguna regla moral que vaya a atarles las manos? Lo primero siempre es salvar el pellejo, a cualquier precio. Sea como fuere, lo cierto es que la ideología del “derechohumanismo” y del democratismo más ramplón capturó a partir de 1983 al conjunto de las instituciones políticas y culturales y a los sujetos sociales que en ellas se refugiaron.

Era, después de todo, la consecuencia lógica del triunfo contrarrevolucionario en la década anterior.

Pero ¿qué sucedía en las instituciones militares? La rosca oligárquico-imperialista que las había utilizado en 1976 para aplas-

tar al movimiento nacional-popular decidió convertirlas en el chivo expiatorio una vez que su sangrienta tarea estuvo realizada. La doctrina de la “seguridad nacional” –con su anticomunismo y su antiperonismo enfermizos–, que de tanta utilidad había resultado cuando se necesitaba proporcionar a los “grupos de tareas” una ideología autojustificatoria de su práctica represiva, dejó de ser funcional. El democratismo derechohumanista, que tan buenos servicios prestaba en la lucha ideológica contra las concepciones socialistas y revolucionarias, podía servir –¿por qué no?– para rastrear las fuerzas armadas y purgarlas de sus componentes nacionalistas y populistas.

La tarea resultaba necesaria para el orden “democrático”, especialmente después de que la Guerra de Malvinas había favorecido la maduración de muchos de esos nacionalistas, que de “nacionalistas oligárquicos” se iban transformando en “nacionalistas populares”.

La irrupción de los carapintada en 1987, que con algunas variantes programáticas y de liderazgo se mantuvo hasta el 3 de diciembre de 1990, expresó esa maduración del nacionalismo en los cuadros militares.

La “autocrítica” de Balza bajo el menemismo significó el aplastamiento de ese proceso de maduración. Balza reivindica, en su artículo de Clarín, ese aplastamiento que se llevó a cabo a través de gestores como él mismo; un aplastamiento de naturaleza absolutamente reaccionaria.

¿Qué pasó el 3 de diciembre de 1990?

Escribe Balza:

Después del motín de Villa Martelli (diciembre de 1988) encabezado por el entonces coronel Seineldín, parte del menemismo había confiado en él como el reaseguro democrático y éste, desde su detención en los cuarteles de Palermo, daba audiencias y recibía a políticos, legisladores, sindicalistas, militares retirados y algún obispo, exponiendo su percepción sobre el proceso electoral del próximo año y el diseño del futuro Ejército Nacional en reemplazo del Ejército Argentino.

En realidad, lo que Seineldín significaba durante los meses previos al triunfo electoral de Menem no era propiamente el “reaseguro democrático”; era, por el contrario, el reaseguro de que los “democráticos” no podrían contar con las fuerzas armadas para interrumpir el proceso de revolución nacional que Menem prometía retomar luego del desbarrancamiento del alfonsinismo.

Sin embargo, a las pocas horas de ganar las elecciones se hizo evidente que Menem había consumado una de las mayores estafas políticas de las que se tenga memoria.

Se presentó ante la audiencia televisiva de Bernardo Neustadt y manifestó, sin sonrojarse, que el programa que iba a poner en marcha era la antítesis exacta del que había prometido durante la campaña electoral. No sin razón, Balza escribe: “Creo que en esos días el gobierno ya no pensaba que Seineldín era un reaseguro para la democracia”.

¿Y qué pensaban los militares carapintada? Una parte de ellos estaba siguiendo, junto a Aldo Rico, el camino de la integración domesticada en el régimen partidocrático demoliberal, pero otra parte decidió enfrentar al menemismo organizándose en torno de la figura de Seineldín. Observa Balza que “Seineldín solicitó al Presidente indultos, retiro de generales y designación de sus recomendados como ministro de Defensa y secretario de esa cartera, y al general Cáceres como jefe del Ejército”. Y añade: “Todo ello se cumplió”.

Menem aplicaba, frente a Seineldín, la misma táctica que Alfonsín había aplicado frente a Rico: satisfacer las demandas gremiales o corporativas de los carapintada para de ese modo debilitar su base de apoyo; neutralizarlos, impidiendo así que pudieran satisfacerse sus demandas específicamente políticas. Facilitaba la tarea el hecho de que estas últimas ni siquiera estuviesen claramente planteadas.

¿Por qué fracasaron los carapintada?

“El 3 de diciembre de 1990, en el motín autodenominado ‘Operación Virgen del Luján’, participaron entre 1.200 y 1.300 militares rebeldes, en siete focos [...] En menos de 15 horas, todos los focos fueron sofocados y los rebeldes detenidos”, re-lata Balza.

La pregunta es: ¿por qué razón el levantamiento carapintada, que contaba con importante base de apoyo entre los militares, fue tan rápidamente derrotado por las fuerzas del régimen?

La respuesta, válida aunque parezca esquemática, es la siguiente: porque no consiguió articular sus demandas con los sectores políticos y sociales que podían contribuir a materializarlas. El movimiento obrero se hallaba confundido e impotente, más bien a la expectativa, ante el espectáculo contradictorio que ofrecía el recién llegado menemismo. Por su parte, anestesiadas por la ideología derechohumanista, las franjas populares de la pequeña burguesía y el entramado político de izquierda que suele expresarlas veían en los carapintada una suerte de recidiva procesista. Ciertamente, algunos componentes del carapintadismo autorizaban esta mirada.

Pero un análisis más profundo del fenómeno —que partiera, como enseñaba Marx, no de lo que los protagonistas creían que eran, sino de lo que objetivamente eran— ponía de manifiesto que se trataba de otra cosa: los militares carapintada se confrontaban con los altos mandos liberales de las fuerzas armadas, con el poder económico y político nacional y transnacional, y con las líneas directrices del imperialismo estadounidense. Se trataba, sustancialmente, de una irrupción “antiestablishment”, y esto le confería un carácter efectivamente, o al menos potencialmente, progresivo.

Balza reivindica su participación en el aplastamiento del levantamiento carapintada en los siguientes términos:

“Tenía la plena convicción de que todos habíamos cumplido con nuestro deber de soldados en salvaguarda de las instituciones de la República y de haber insertado definitivamente la fuerza en el camino de la subordinación al poder civil”.

De eso se trataba: de “insertar” a las fuerzas armadas en el universo institucional y conceptual diseñado por el imperialismo para el período poscontrarrevolucionario. La importancia de esta inserción se observaría durante la crisis de diciembre de 2001. Si en ese momento un ejército nacional hubiese salido a la palestra para establecer un frente patriótico junto a la clase obrera, los sectores populares y una izquierda de raíz nacional, entonces el régimen partidocrático-demoliberal no se habría recompuesto tan fácilmente como lo hizo.

El “carapintadismo” se habría trasmutado en una versión argentina del chavismo, y Argentina habría reiniciado un nuevo

ciclo de revolución nacional (o de revolución permanente, como decimos los socialistas de la Izquierda Nacional).

Por todo lo anteriormente expuesto, los sectores populares no tenemos nada que festejar en el vigésimo aniversario de la derrota del “carapintadismo”.

“El peligro de politizar las fuerzas armadas”

Gustavo Cangiano

EN LA NACIÓN DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2010, ANDRÉS Oppenheimer, el ex trotskista que pasó a revistar para la CIA, publica una columna que titula “El peligro de politizar las fuerzas armadas”.

Escribe Oppenheimer que “existe una nueva amenaza para las democracias latinoamericanas que no está recibiendo la atención que merece: la creciente politización de las fuerzas armadas de la región”. Los ejemplos que menciona son los que uno puede imaginar: “el ejército boliviano se proclama socialista, antiimperialista y anticapitalista”, aúlla.

Y sigue aullando: “El teniente general venezolano Henry Rangel Silva señala que las fuerzas armadas están ‘casadas’ con la revolución bolivariana”.

Es notable y muy instructivo que Oppenheimer, un despreciable escriba al servicio del imperialismo yanqui, formule sus advertencias desde una perspectiva “derechohumanista”. Dice que el grupo no gubernamental Human Rights Watch, a través del director del Departamento de las Américas, Jorge Vivanco, le expresó a él de modo directo su preocupación por esta politización de los militares latinoamericanos. Oppenheimer dice: “Coincido con Vivanco y otros activistas por los derechos humanos en que las declaraciones de comandantes militares venezolanos y bolivianos sientan un terrible precedente”.

Es decir: a la politización de las fuerzas armadas, Oppenheimer opone hipócritamente una suerte de apoliticismo profesionalista comprometido con “la defensa de los derechos humanos”. Se advierte claramente la función reaccionaria que cumple la ideología antimilitarista y derechohumanista. Porque el problema de América Latina no ha sido “la politización de los militares”, sino la naturaleza de esa politización. Politizados han estado siempre y no podría haber sido de otra manera. ¿O acaso cabe esperar que una institución que constituye la “última razón” del orden imperante renuncie a defenderlo en nombre del apoliticismo y los “derechos humanos”? Todo ese cacareo demoliberal

es veneno ideológico para anestesiar la conciencia de los sectores populares. ¡Como si fuera posible apartar a las fuerzas armadas de los antagonismos de clase que atraviesan las sociedades de las que ellas son parte!

Gracias a ese cacareo, por ejemplo, los militares pinochetistas prepararon tranquilamente el golpe de 1973 contra Allende, mientras el gobierno de la Unidad Popular apostaba –mediante la doctrina Schneider– a “no politizar al ejército”.

Es altamente positivo que los militares venezolanos y bolivianos estén politizados y participen activamente de los procesos revolucionarios que atraviesan sus respectivas sociedades. Por la misma razón, es altamente negativo que el gobierno kirchnerista, en vez de tener una política militar de carácter nacional-popular, se empantane en el derechohumanismo pequeñoburgués, profundamente antimilitarista, y le entregue la formación ideológica de los cuadros militares a la derecha más reaccionaria (tanto la derechohumanista como la antiderechohumanista), que sabrá usarlos en el momento en que necesite hacerlo.

El imperativo de la hora es malvinizar a las fuerzas armadas, es decir, desenvolver en su seno el espíritu patriótico, popular, antiimperialista y revolucionario de la tradición sanmartiniana. Necesitamos un ejército comprometido con la revolución nacional-popular, y no uno defensor de “las instituciones”, “apolítico”, “profesionalista” y “derechohumanista”.

El caso chileno

Leí el libro *Militares contra Pinochet*, de Carlos Gutiérrez, un politólogo chileno vinculado al “progresismo” académico. El libro forma parte de la colección *Los otros militares*, de *Le Monde Diplomatique*. Tenía guardado el libro desde hacía un tiempo y no lo leía por desconfianza hacia la línea editorial (favorable a los intereses de la burguesía imperialista francesa). Pero recordé un consejo: no importa tanto quién es el que dice algo sino qué es lo que dice. Y leí el libro, entonces. Lo recomiendo.

La tesis del autor –cara a quienes integramos la Izquierda Nacional– es que a partir de los años cincuenta existen dos ejércitos en Chile, o, más propiamente, “dos almas” que se disputan la hegemonía en las fuerzas armadas. De un lado, “una fuerte tradi-

ción anticomunista y elitista apegada a las ideas de moda generadas por el campo ideológico estadounidense, expresadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional”; de otro lado, “una visión más nacional, propiciadora de un desarrollo hacia adentro, que adjudicaba el papel central al Estado en lo económico-social, buscaba cierta equidistancia con los centros de poder internacionales y era más proclive a la aceptación de ideas progresistas”.

Tras una rápida referencia a la política chilena en los años cincuenta y sesenta, cuando Estados Unidos, a través de programas de ayuda militar, adquiere una influencia decisiva sobre las fuerzas armadas, el libro se concentra en la situación generada con la llegada al gobierno de Salvador Allende.

En 1970, el general René Schneider consigue imponer en el ejército una línea “legalista” y “constitucionalista”, en oposición a los intentos desestabilizadores y a los sucesivos complotos del “alma” anticomunista y proestadounidense encarnada por algunos militares, como el célebre general Viaux. Pero en octubre de 1970, un grupo terrorista apoyado por la CIA asesinó a Schneider, en el marco de la insistente presión de los anticomunistas para que no se entregara el gobierno a la triunfante Unidad Popular. Asumió entonces la jefatura del ejército el general Carlos Prats, quien durante tres años garantizaría la vigencia de la “doctrina Schneider” y se convertiría en un obstáculo para las apetencias de los golpistas.

Pero ¿en qué consistía la “doctrina Schneider”?

Cuenta el autor que esa doctrina se fundaba en los siguientes puntos: constitucionalismo, profesionalismo apolítico, no deliberatividad, disciplina y compromiso en la defensa de las instituciones.

Dice Gutiérrez: “La fundamental cuestión del constitucionalismo de las fuerzas armadas, que había sido formulada por el general Schneider, fue repetidamente planteada por el general Prats desde los comienzos de su gestión, y defendida, luego, en forma asertiva ante los recurrentes reclamos de los opositores políticos al gobierno popular”.

Ahora bien, ¿qué sucedía en el país mientras Prats intentaba por todos los medios garantizar la vigencia de la “doctrina Schneider” en el ejército? Lo que sucedía era que la lucha de clases alcanzaba una intensidad inusitada; es decir, se profundizaban los antagonismos entre las clases y los sectores, tanto en la dimensión política como en las dimensiones económica, social e ideológica.

Maduraba aquello que el análisis marxista llama “situación revolucionaria”, es decir, se profundizaba el enfrentamiento entre las fuerzas revolucionarias (aquellas que bregaban por remover las estructuras del capitalismo semicolonial) y las fuerzas contrarrevolucionarias (las que defendían el statu quo y los intereses de la rosca oligárquico-imperialista).

En los países semicoloniales (como Chile o Argentina), la lucha de clases sólo puede adquirir un curso favorable para los sectores populares si éstos consiguen estructurar un frente nacional antiimperialista: detrás de un programa de nacionalismo económico y cultural, la movilización de masas debe ser capaz de reunir en un solo puño a la clase obrera, la baja clase media, los intelectuales antiimperialistas, la Iglesia de los pobres y los militares patriotas. ¿Avanzaba Chile en esta dirección bajo el gobierno de Allende? Hay indicios de que sí lo hacía: la reforma agraria y la nacionalización del cobre eran un duro golpe al poder concentrado de la oligarquía; en los suburbios industriales empezaban a ensayarse formas de poder autogestionario que apuntaban a trascender el régimen de representación partidocrático demoliberal; las fuerzas armadas participaban en programas de desarrollo industrial y energético, lo que satisfacía a la mayor parte de sus cuadros. Según un estudio, “el 80% del personal en las fuerzas armadas era de tendencia centro-izquierdizante, mientras que sólo una pequeña fracción tenía marcadas inclinaciones derechistas”. En el plano político, entre tanto, las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 indicaban un creciente apoyo electoral a la Unidad Popular frente a la oposición unificada del Partido Nacional y la Democracia Cristiana (una suerte de “unión democrática” chilena).

Y, sin embargo, en agosto de 1973, Prats debió renunciar a su puesto al frente del ejército y fue reemplazado por Augusto Pinochet. Aunque el Partido Comunista celebró la llegada de Pinochet, considerándola una garantía de continuidad de la línea de “profesionalismo apolítico”, lo cierto es que quedó sellada la suerte del gobierno popular.

El 11 de septiembre de 1973, el imperialismo y la oligarquía retomaron el poder político en Chile con el concurso del sector de las fuerzas armadas infiltrado por la CIA y envenenado con la ideología del anticomunismo pergeñada por los estrategas del Pentágono. Uno de los méritos del libro de Carlos Gutiérrez es narrar la historia poco conocida de la sangrienta represión que su-

frieron los militares “constitucionalistas” a manos de los pinochetistas: fueron miles los cuadros del ejército, la marina y la aviación que sufrieron persecución, torturas, muerte, exilio. El propio Prats fue asesinado en 1974 durante su estadía en Buenos Aires, en una acción conjunta de la DINA y la CIA, con apoyo de los paramilitares argentinos.

El otro mérito del libro de Gutiérrez –quizás el gran mérito del libro– es estimularnos a pensar por qué razón se frustró el proceso de revolución nacional y social en Chile. El propio autor, luego de exaltar a lo largo de todo el libro la “doctrina Schneider”, no tiene más remedio que hacer un reconocimiento de decisiva importancia: “Finalmente corresponde destacar que las restricciones derivadas de los principios de profesionalidad, no deliberatividad y obediencia a los mandos no les permitieron obtener a estos diferentes grupos [de militares] decididos a defender el gobierno de la Unidad Popular, más y mejores resultados a favor del sostenimiento de aquélla. Contradicción o paradoja, aunque mantuvieron esporádicos contactos con instancias gubernamentales y organizaciones de izquierda, fueron por lo general reticentes a mantener coordinaciones internas y a preparar planes para oponerse al golpe de Estado precisamente debido a aquellas concepciones doctrinarias. En esas condiciones, poco pudieron hacer frente al amargo amanecer del 11 de septiembre de 1973”.

Es decir, la “doctrina Schneider” terminó convirtiéndose en una trampa mortal para el gobierno de la Unidad Popular que la propiciaba. El “profesionalismo” y la “no deliberatividad” desarmaron política e ideológicamente al sector nacional de las fuerzas armadas y dejaron al grueso de los militares a merced de la minoría derechista y anticomunista apadrinada por la CIA. En momentos de agudización de la lucha de clases, constituía una utopía pequeñoburguesa (propia de socialdemócratas y estalinistas) creer que las fuerzas armadas podían permanecer al margen de la situación. Cuando la revolución y la contrarrevolución libran batallas decisivas, nadie ni nada pueden sustraerse a ellas, y es inevitable tomar partido a uno u otro lado de la barricada. Lo correcto habría sido hacer lo contrario de lo que proponía la “doctrina Schneider”. Había que promover la politización y la “deliberatividad” en el seno de las instituciones armadas, a fin de disputarles la hegemonía a los golpistas.

El caso chileno pone de relieve la gran importancia que tiene la adopción de una política militar correcta por parte de las corrientes del campo nacional y popular.

La represión durante el Proceso

*Debate de integrante de Socialismo Latinoamericano
con columnista de la revista Cabildo*

Crítica de Gustavo Cangiano a Aníbal D'Angelo Rodríguez

ANÍBAL D'ANGELO RODRÍGUEZ (ADR) ES UNO DE LOS redactores más talentosos de Cabildo; sin embargo, disiento respecto de la mayor parte de lo que escribe. En su última nota, aborda el tema de la represión durante la última dictadura. Indignado, dice que “la historia que se cuenta a nuestros hijos” es una gran mentira. ¿Cuál es esa historia? Dice ADR: “El 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas realizaron un golpe de Estado, usurpando el poder e instalando, a partir de ese momento, el terrorismo de Estado en la Argentina, metodología precisa y sistemática, producto de un plan político para la región, que estaba inmersa en procesos de luchas populares de liberación y reivindicaciones sociales en nuestro país”. Concluye que la historia así narrada es “una versión apta para lobotomizados”.

Después de leer y releer la versión de la historia “para lobotomizados” contra la que despotrica ADR pensé: yo debo ser uno de esos lobotomizados, porque comparto en lo sustancial esa versión.

Y seguí leyendo a ADR para encontrar cuál es la versión “verdadera” que nos cuenta. Me encontré con esto: “El pequeño detalle de que estos jóvenes idealistas asesinaran, torturaran, secuestraran y colocaran bombas queda piadosamente oscurecido. Y a este nivel de mentira llega la zurda en este país, como que está compuesta por adoradores del Padre de la Mentira”.

Digo yo: ¿En qué desmiente la versión que nos cuenta ADR a la versión que él atribuye a los “adoradores del Padre de la Mentira”, es decir, del mismísimo “Príncipe de las Tinieblas”? Salta a la vista que ambas versiones son perfectamente compatibles entre sí. Que los “subversivos” hayan eventualmente asesinado, torturado, etc., no indica que las fuerzas armadas no hayan usurpado el

poder e implantado el terrorismo de Estado. En todo caso, la primera versión omitiría lo que la segunda subraya, del mismo modo que la segunda versión omite lo que la primera subraya.

Posiblemente intuyendo que esta confrontación entre torturadores “subversivos” y torturadores militares conduciría a tener que dar explicaciones acerca de los objetivos políticos que determinaron la aplicación de la tortura, D’Angelo aborda la cuestión. Dice: “No nos referimos sólo a las bombas, secuestros y asesinatos que los subversivos cometieron. Hablamos sobre todo de los que no llegaron a cometer porque los frenaron. Quizás todo el problema de esa guerra radica en una cuestión de perspectiva. Si uno se decide a entender lo que enseña el siglo XX, entonces no puede ignorar lo que fue la guerra revolucionaria en todo el mundo”.

Está claro. El mérito de las fuerzas armadas habría sido exterminar a los “subversivos” no sólo por lo que éstos efectivamente hacían (torturar, matar, secuestrar), sino fundamentalmente por lo que habrían hecho en caso de alcanzar el poder (haber implantado el “socialismo” con apoyo de Cuba y la URSS). Al no considerar este punto, “la partidocracia” –dice ADR– fue ingrata con “nuestros camaradas que patearon puertas, que expusieron su vida y la ofrendaron para evitar que fuéramos una Cuba austral”.

Respuesta de Aníbal D’Angelo Rodríguez

Un amigo me comunica un mail que le enviara un tal Cangiano, en el que luce una nota sin firma.

En esa nota se critica una notícula de mi autoría aparecida en la revista *Cabildo*. No contesto notas anónimas, aunque comiencen con un homenaje a mi talento, pero voy a concederle el beneficio de la duda al señor Cangiano y voy a suponer que es el autor de la nota.

Veamos. Mi notícula es una crítica a un texto de la Secretaría de Derechos Humanos en la que sintetiza la historia de la guerra contrarrevolucionaria de esta manera: “El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas realizaron un golpe de Estado usurpando el poder e instalando, a partir de ese momento, el terrorismo de Estado en la Argentina, metodología precisa y sistemática, producto de un plan político para la región, que estaba inmersa en procesos de lu-

chas populares de liberación y reivindicaciones sociales en nuestro país”.

Comentando este texto, sostuve que era una versión para “lobotomizados o desinteresados”, pues olvidaba el pequeño detalle de que los jóvenes idealistas reprimidos por los militares “asesinaban, torturaban, secuestraban y ponían bombas”.

El señor Cangiano (supongamos que sea él) me pregunta en qué desmiente la versión que yo cuento a la de la Secretaría de DD.HH. y por qué no complementar ambas versiones ya que el “que los «subversivos» (yo no uso ese término, es de Cangiano, con comillas y todo) hayan eventualmente (sic) asesinado, torturado, etc., no indica que las fuerzas armadas no hayan usurpado el poder e implantado el terrorismo de Estado”.

Con mucho gusto le explicaré al señor Cangiano lo que me pregunta.

Él –y la Secretaría de DD.HH.– saben de buena tinta que hubo un plan para la región de reprimir a los jóvenes idealistas. Supongo que se refieren, ambos, al Plan Cóndor pero también a algo mucho más siniestro: un plan imperialista urdido por los Estados Unidos para sofocar esas “luchas populares” y esas “reivindicaciones sociales”. Para aceptar esto hay que pasar por dos pequeños obstáculos. El primero es que entre 1977 y 1980 gobernó los Estados Unidos Jimmy Carter, un presidente de izquierda que puso todos los palos posibles –Patricia Derian incluida– en las ruedas del Proceso. Pero claro que Cangiano tiene una versión del asunto inspirada mitad por Vladimiro Ulianov (a) Lenín y mitad por las películas de la serie Bourne. Los malos son “la CIA y el Pentágono”, que trabajan por su cuenta a espaldas del Presidente y el Senado. Pero ese obstáculo es lo de menos. El otro, ya más gordito, es que los militares del Proceso no fueron ni los primeros ni los únicos en reprimir a los jóvenes idealistas con terrorismo de Estado y todo. ¿Esa metodología “precisa y sistemática” fue también la de los gobiernos constitucionales peronistas?

¿Se acuerda el señor Cangiano de la represión legal de los primeros guerrilleros durante el gobierno de Illia? ¿Recuerda la represión legal, sin terrorismo de Estado, que hizo el gobierno de facto pero legalista de Lanusse? ¿Recuerda la amnistía de 1973 y cómo los terroristas “volvieron a matar”? ¿Recuerda lo que pasó en el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y su señora esposa? Los militares “usurparon el poder” como lo habían hecho

otras cinco veces en el siglo, pero no “implantaron el terrorismo de Estado”. Ya estaba implantado dos años antes. No hicieron más que continuarlo, si uno quiere usar una expresión inventada casualmente por los creadores del Estado terrorista. Uno lamenta ciertos métodos del Proceso, pero, a la luz de lo que pasó tras la actuación escrupulosamente legal de Lanusse, se siente tentado a comprenderlos, si bien no a justificarlos.

Vamos a ser breves. La versión real, simplificada en pocas líneas, de lo que pasó en la Argentina, es ésta. A principios del siglo XX, Lenín corrigió la versión marxista de la lucha por el poder para el proletariado. En lugar de la huelga revolucionaria había que emprender la guerra revolucionaria. En cumplimiento de esta consigna, desde 1917 hasta 1991 en todos los continentes se desató esa guerra, en cuyo desarrollo los revolucionarios asesinaron cien millones de personas. Esa guerra llegó a la Argentina entre 1965 y 1979 y fue enfrentada por gobiernos civiles y militares, constitucionales y de facto. Tanto en algunos gobiernos civiles como en el último gobierno militar se utilizaron métodos ilegales de represión, cuya descripción es para la izquierda la de “terrorismo de Estado” y para las personas sensatas, un “exceso en la legítima defensa”.

Esto aclarado, confieso no tener ya paciencia para responder las tonterías que el señor Cangiano dice en la segunda parte de su nota. Es la versión zurda según la cual:

1) Lo que había en los setenta eran “luchas populares de liberación” y “reivindicaciones sociales en nuestro país” (¿reivindicaciones sociales contra el gobierno constitucional peronista? ¿En serio?)

2) Los militares “mataron y murieron... para que ocurriera lo que efectivamente ocurrió, para que fuéramos lo que somos, un país arrodillado ante el imperialismo, inmerso en la degradación económica y moral, con millones de compatriotas subalimentados y regentado por (la) partidocracia...”.

Insisto en que no creo que valga la pena refutar estas afirmaciones. Son la versión zurda del conspiracionismo, una especie de enfermedad senil del izquierdismo. Según ella, Videla, Martínez de Hoz, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Kirchner, son todos parte de ese plan siniestro elaborado en la CIA y el Pentágono. Es que la zurda, sin programa político desde que se cayó el socialismo real, se refugia en esta clase de simplificaciones que pretenden explicar todo y no explican nada. Con ellas tranquiliza su alma y duerme

mejor: “todos, todos manejados por el imperialismo”. Sólo ellos, los grupúsculos residuales de la izquierda violenta, están libres del pecado. Los guerrilleros urbanos y rurales habrán “eventualmente” asesinado, pero su lucha era justa.

Bien. Si el señor Cangiano quiere tranquilizar su alma creyendo estas cosas, allá él. Puedo explicarle algunas cosas, pero no puedo rehacer su concepción del mundo. Que le haga provecho.

Respuesta de Gustavo Cangiano

A pesar de que el señor ADR dice que “no contesta anónimos”, como supuestamente sería mi texto, lo contesta; a pesar de que dice que no tiene “paciencia” para “responder las tonterías” que yo escribo, intenta responderlas. El señor ADR dice una cosa y hace otra. Tratándose de quien se trata, no debería sorprendernos: ADR dice que es nacionalista y católico, pero defiende a una dictadura que torturó y mató argentinos para permitir que hoy estuviera vigente un régimen demoliberal que destruye a las fuerzas armadas, se burla de la Iglesia y reduce a la Argentina a la condición de semicolonias violentadas por los vampiros del capitalismo transnacionalizado.

Pues bien, yo voy a ir directo al punto que me interesa debatir, no con estos sedicentes “nacionalistas” de Cabildo que han apoyado y todavía reivindican el golpe antinacional y antipopular de Videla-Martínez de Hoz en 1976, sino con los nacionalistas sin comillas a quienes aguarda un lugar en el Frente Nacional Antiimperialista que tenemos que construir entre todos los patriotas.

¿Qué es lo que está en discusión? Nada menos que el golpe del 24 de marzo de 1976 y la política represiva que lo caracterizó. ¿Cuál es la tesis que defienden ADR y los redactores de Cabildo? Que tanto el golpe como la política represiva que lo caracterizó fueron legítimos. ¿Y de dónde proviene esa legitimidad? El argumento empleado para defenderla es verdaderamente insólito, siendo que quien lo expone (el señor ADR) me acusa a mí de incurrir en el “conspiracionismo”, que sería una “estupidez” según la cual “un plan siniestro elaborado por la CIA y el Pentágono” explicaría todo lo malo que pudieran haber hecho Videla, Martínez de Hoz, etc. El argumento con el que ADR reivindica la legitimidad del golpe del 24 de marzo y la represión sangrienta que lo caracterizó —préstese

atención— es el siguiente: “A principios del siglo XX Lenin corrigió la versión marxista de la lucha por el poder para el proletariado. En lugar de la huelga revolucionaria había que emprender la guerra revolucionaria. En cumplimiento de esta consigna, desde 1917 hasta 1991 en todos los continentes se desató esa guerra en cuyo desarrollo los revolucionarios asesinaron cien millones de personas. Esa guerra llegó a la Argentina entre 1965 y 1979...”.

¿No es verdaderamente llamativo que alguien que reprocha a “los zurdos” incurrir en el “conspiracionismo” pretenda explicar todas las luchas políticas, sociales y nacionales del siglo XX a partir de supuestas directivas o consignas formuladas por Lenin? ¿Qué clase de método historiográfico es aquel que busca las causas de un fenómeno histórico de la magnitud de la Revolución rusa de 1917, por ejemplo, o de la Guerra de Vietnam, o del inacabado conflicto en Palestina, o de cualquier otro fenómeno semejante, no en factores sociales, económicos o culturales, sino en la voluntad perversa de tal o cual individuo (Lenin, en este caso)? ¿No se trata, semejante extravío metodológico, de una de las formas más pueriles y evidentes del “conspiracionismo”?

En el mismo número de Cabildo que publica la vergonzosa defensa que hace ADR del golpe de Videla-Martínez de Hoz y de la sangrienta represión por ellos desatada (no hay que llamarla “terrorismo de Estado”, nos previene ADR, sino apenas “excesos en legítima defensa”), aparece una nota titulada “La salvajada de ‘El Cordobazo’ ”. La nota incurre en el mismo error metodológico que afecta el cerebro calenturiento de ADR. Nos dice que el 29 de mayo de 1969 “gobernaba nuestra patria el general Juan Carlos Onganía”, cuyo gobierno tenía cosas malas, pero también cosas buenas, tal como “su acentuada postura anticomunista”. Así estaban las cosas cuando “coincidió esta circunstancia —la de este desdichado gobierno militar así descripto— con el estallido de la Guerra Revolucionaria Marxista en casi todo el continente americano, auspiciada y solventada por Cuba, e indirectamente por la URSS”. Entonces, “como parte fundamental de esta Guerra Revolucionaria se planificaron, entre otras acciones, estallidos obreros y estudiantiles en diferentes ciudades”. El Cordobazo, en consecuencia, habría sido uno de esos “estallidos obreros y estudiantiles” decididos en algún rincón de Cuba o de la URSS por los “adoradores del Padre de la Mentira”, como diría ADR. ¿No es sorprendente que haya gente adulta que pueda escribir esta clase de cosas sin siquiera son-

rojarse? ¡Y que encima califiquen de “conspiracionistas” a quienes denuncian la mano del imperialismo yanqui detrás de los golpes militares en los países del Cono Sur hace treinta años!

¿Así que el Cordobazo y demás levantamientos obreros y estudiantiles, por un lado, y el gobierno dictatorial de derecha de Onganía-Krieger Vasena, por el otro, no fueron más que “circunstancias coincidentes”? ¿Sería arriesgarse demasiado suponer que la política llevada adelante por el gobierno de Onganía, y su existencia misma en tanto dictadura ilegítima, podría haber sido la causa disparadora de las puebladas de entonces?

El problema fundamental de esta clase de pseudoexplicaciones está situado más allá de su precariedad intrínseca. Lo que hacen es poner de manifiesto una visión del mundo según la cual nuestra patria y nuestro pueblo desaparecen como factores con identidad propia a la hora de explicar los antagonismos sociales, políticos y económicos. Todo quiere ser explicado a partir de la actuación de factores exógenos, de misteriosos demiurgos que mueven los hilos de esos títeres que vendríamos a ser nosotros, los que salimos a la calle a reclamar por un aumento de salarios, para que se vaya tal o cual gobernante corrupto, o en defensa de los recursos naturales que nos roban las multinacionales. Semejante pseudoexplicación quita legitimidad a todo lo que podamos hacer, puesto que carecemos de autonomía y no somos sujetos individuales y colectivos de nuestra propia historia, sino meros objetos manipulados por instancias cuya existencia misma desconocemos. Este método historiográfico es el de los cipayos, tanto de los cipayos de izquierda, que ven en la historia argentina una sucesión de gobiernos proingleses, proestadounidenses o proalemanes que “engañan a las masas”, como de los cipayos de derecha, que ven en las luchas populares las directivas dadas a sus “agentes locales” por el marxismo-leninismo-trotskismo-maoísmo, que quiere hacer de nosotros una nueva Cuba, una nueva URSS o una nueva China.

Cabildo es la más prístina expresión de este cipayismo de derecha o de ultraderecha. Su razón de ser es hacer creer a sus lectores militares, católicos o nacionalistas, que el golpe del 24 de marzo y la sangrienta represión a que dio lugar fueron necesarios para “salvarnos del marxismo ateo”. En este sentido, *Cabildo* es exactamente la contrafigura que necesitan los mercachifles del derecho-humanismo, cuya “política de la Memoria” consiste en presentar la

historia argentina como un enfrentamiento políticamente vaciado entre los “buenos” (generalmente civiles) y los “malos” (generalmente militares). ¡Basta con dejar que ADR defienda la “tortura lógica” de las “dictaduras de derecha” para que el relato derechohumano se torne verosímil!

La explicación casi de sentido común es la que señalé en el mail que dio origen a la réplica de ADR. La dictadura de Videla-Martínez de Hoz, con su política represiva, funcional a su devastadora política económica y cultural, debe ser juzgada no a partir de lo que hipotéticamente podría haber sucedido en el país pero no sucedió. Debe ser juzgada a partir de lo que efectivamente ocurrió gracias a ella. Y gracias a esa dictadura, gracias a Videla-Martínez de Hoz, y gracias a los soldados mandados a “patear puertas y arriesgar su vida”, Argentina es hoy un país decadente sumergido en una democracia prostibularia que condena a millones de compatriotas al hambre y a otros tantos a la miseria moral e intelectual. Sin los apóstoles de la “guerra contrarrevolucionaria”, no nos solazaríamos hoy con los Tinelli, con los Sofovich y con el “rubro 69”, con los Macri y con los De Narváez. Ellos, Videla-Martínez de Hoz y sus soldados mandados a “patear puertas”, lo hicieron posible.

Los militares en la política

Publicado originalmente en 2000,
en la revista mexicana *Diálogo y Debate*

Daniel N. Moser

SEGURIDAD NACIONAL ES UN CONCEPTO QUE PUEDE PRESTARSE a múltiples interpretaciones, que van desde la plasmada en la tristemente célebre “Doctrina de la seguridad nacional” hasta una visión integradora e incluyente donde la defensa de los valores culturales, políticos y económicos de una nación es prioritaria. En cualquier caso, las fuerzas armadas desempeñan un papel determinante.

La seguridad nacional en el primer mundo

Existen innumerables ejemplos de cómo los países hegemónicos practican la política nacionalista, defensora del interés nacional, que desaconsejan a los nuestros:

1. Cuando los árabes amenazaron con adueñarse de la Mercedes-Benz a finales de los ochenta, el Deutsche Bank intervino en representación de la economía alemana para adquirir las acciones ofrecidas en venta.

2. La Airbus, fabricante de aviones civiles, propiedad de los gobiernos británico, francés, alemán y español, se creó para quebrar el monopolio estadounidense y capturar un tercio del mercado mundial a mediados de los noventa. Para tener éxito, la Airbus necesitó 26 mil millones de dólares de inversiones oficiales y un mercado cautivo en forma de líneas aéreas de propiedad oficial.

3. En Alemania, el proteccionismo está bien arraigado y resulta eficaz. Por ejemplo, las telecomunicaciones, la banca, los seguros, los servicios eléctricos y las industrias químicas actúan de hecho como cárteles, y es muy difícil que una empresa extranjera ingrese en esos mercados sin un socio alemán.

4. Japón ofrece muestras claras de nacionalismo. Nada podría ser más japonés y menos global que una empresa japonesa,

aunque funcione en los cinco continentes. Los que deciden son japoneses, los accionistas también; la organización, la investigación y el desarrollo son japoneses.

En todas las potencias también existen infinidad de obstáculos que confirman la falacia del “libre mercado”; éstos incluyen leyes restrictivas, masivos subsidios oficiales y sofisticadas y burdas barreras a las importaciones, cuya enumeración podría llenar las páginas de un voluminoso libro.¹

El papel político de las fuerzas armadas en América Latina

En muchos momentos durante el siglo XX –en el XXI se dieron casos en Honduras y Ecuador, por ejemplo–, las fuerzas armadas latinoamericanas han actuado como guardianas de los intereses de las minorías vernáculas aliadas a factores de poder mundial. Pero es necesario, en una evaluación objetiva, hacer mención de su doble papel histórico, que también las ha puesto al lado del pueblo.

El antimilitarismo abstracto –en gran medida fomentado por la funesta participación que generalmente han tenido las fuerzas armadas en la política– suele impedir una comprensión del papel que las instituciones armadas desempeñan en la historia de nuestro continente.

Si los militares debieran encerrarse en sus cuarteles, tal vez los abogados en sus bufetes, los médicos en sus consultorios y los obreros en sus fábricas, habría que crear entonces una clase política en la que no participara nadie más que “políticos de carrera”. El punto no resiste el análisis.

El problema no es la participación de los militares en la política, sino la forma en que lo han estado haciendo.

La doble moral que subyace en la política del imperialismo² se ha puesto de manifiesto una y otra vez a la hora de reconocer o desestabilizar gobiernos surgidos de acciones militares. Ejemplo del primero es el de Pinochet en Chile; para el segundo caso vale el de Torrijos en Panamá.

Los ejércitos y el Estado nacional

Desde los levantamientos de la Revolución francesa y la desaparición de la Santa Alianza, la consolidación de la democracia burguesa

y el fortalecimiento del Estado nacional se lograron, en gran parte, gracias a la participación de los ejércitos plebeyos de Europa.

Dos siglos antes, el ejército de los “cabezas redondas” de Oliverio Cromwell había asegurado los derechos de la burguesía urbana y de los comerciantes puritanos con la decapitación de Carlos I. Cortarle la cabeza al rey para asegurar el desarrollo de la democracia en Inglaterra no es un argumento muy oído, pero sucedió.

A las grandes potencias no les agrada recordar su pasado revolucionario, pues ahora están en otra cosa: evitar las revoluciones que pongan en peligro su hegemonía. Parece haber una memoria selectiva que pretende dejar en el olvido la íntima relación que existe entre la revolución y la democracia. Pero la historia se empeña en recordarlo.

Un siglo antes de la Revolución francesa, el ejército de Cromwell garantizó los derechos del común y la soberanía nacional de Inglaterra. Por contradictorio que parezca, los ejércitos fueron pilares en la consolidación de las democracias que hoy exhiben como modelos los países centrales.

Hoy, con arsenales sofisticados capaces de destruir varias veces el planeta, son esos mismos países los que, al tiempo que fomentan el militarismo propio, denuestran el de América Latina, por ejemplo.

La razón es muy sencilla: el militarismo de sentido nacional implicaría la participación de los ejércitos latinoamericanos en un proceso político destinado a consolidar al Estado nacional y el proceso de integración en marcha; retomarían de esta manera el papel histórico que practicaran en los tiempos de Bolívar y San Martín.

Cuando el militarismo ha sido fomentado en nuestro continente por los países hegemónicos, lo ha sido con el interés de crear enfrentamientos. Tal fue la histórica y eficiente política británica en América del Sur, al imponer la máxima “divide y triunfarás” entre los ejércitos de Chile, Argentina y Brasil.

Ejército y capitalismo

Si bien todos los ejércitos de Europa cumplieron de un modo u otro fines análogos al de Cromwell en Inglaterra, esto es, contribuir a la formación de los modernos estados nacionales y permitir

de tal modo el desarrollo de una economía capitalista y una sociedad burguesa, ya antes los países europeos se habían lanzado a la conquista rapaz del resto del mundo.

Tal proceso político modificó –no podía ser de otra forma– el sentido puramente nacional de sus fuerzas armadas. Así, se transformaron en ejército de ocupación y adquirieron un papel agresor –imperialista.

En los países del tercer mundo que habían sido tomados como colonias, no existía de hecho un ejército nacional. El ejército extranjero actuaba como fuerza de ocupación. Así sucedía con el ejército francés en Argelia y Vietnam, por ejemplo.

[...] en países semicoloniales que deben realizar su unidad nacional, el partido revolucionario debe elaborar una política frente al ejército. [...] nos hemos referido a la diferencia funcional entre el ejército argelino y el ejército francés, para tomar el ejemplo más simple. En el ejército argelino sus jefes socialistas no eran marxistas; por el contrario, lo dirigían jefes de la burguesía nacional y lo apoyaban hasta jefes feudales. Pero a excepción del Partido Comunista Francés, que se opuso a la independencia de Argelia, todos los revolucionarios del mundo sostuvimos la causa argelina. Era imposible situar en un mismo plano al ejército del mayor Gualberto Villarroel en la Bolivia de 1943 que al ejército “democrático” del general Mac Arthur, en la misma época.³

Las guerras nacionales de liberalismo surgidas a finales de los cuarenta alumbrarían ejércitos no profesionales que desplazarían a las fuerzas colonialistas.

Si en sus primeros tiempos la colonización se caracterizó por el saqueo y la brutalidad que ejercían las potencias “civilizadas”, en sus etapas posteriores el saqueo continúa, pero la imposición por la fuerza ha sido desplazada a un segundo plano.

La manipulación de los sistemas cultural y educativo ha posibilitado un sometimiento más sutil y efectivo. Con él se ha ido incorporando a sectores de las sociedades de las colonias o semicoloniales (jurídicamente estados soberanos, políticamente dependientes) al esquema de dominación.

Los países agresores representan la “civilización”, y sus culturas nacionales se transforman en algo esencialmente contradictorio, como la “cultura universal”.

Los militares, como los intelectuales, cayeron en la trampa, y muy pocas fueron las excepciones. Para quienes pretendían escapar del “sistema”, éste les reservaba el aislamiento y el repudio.

La tradición de los ejércitos libertadores era sepultada, y una campaña insidiosa, impulsada con el fin de dividir a los países del continente, se imponía. Los medios de comunicación son un instrumento esencial para el éxito de esta política.

Los dos ejércitos

Con mayor claridad en unas naciones que en otras, América Latina vio el surgimiento de lo que podríamos llamar “el fenómeno de los dos ejércitos”.

Dentro de las instituciones armadas se perfilaron dos corrientes globalizadoras de la expresión política militar. Una de ellas estuvo representada por figuras como los generales Torrijos de Panamá, Perón de Argentina o Velasco Alvarado de Perú, quienes en distintos momentos históricos iniciaron procesos revolucionarios que contaron con amplio respaldo popular y el hostigamiento de Estados Unidos, convertido ya en primera potencia. Hoy es un caso paradigmático el de Hugo Chávez en Venezuela.

La otra corriente política de las fuerzas armadas, aliada o al servicio de los grupos minoritarios pero poderosos de la sociedad civil, es la que ha venido aplicando la doctrina de la seguridad nacional impulsada por Estados Unidos, con las trágicas consecuencias conocidas. Pinochet en Chile y Videla en Argentina son dos generales que simbolizan contundentemente esta corriente, que se ha venido imponiendo en las últimas décadas.

La insurrección militar de 1992 frente al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez en Venezuela fue la manifestación política de un sector –mayoritariamente compuesto por oficiales jóvenes– de las fuerzas armadas que no es semejable a experiencias como las de Pinochet o Videla.

La diferencia sustancial está marcada por la simpatía despertada entre amplios sectores de la sociedad, al punto que pocos años después el líder de dicho movimiento, el teniente coronel retirado Hugo Chávez, obtiene un contundente 56% de los votos en unas elecciones presidenciales cuya transparencia nadie cuestionó. Sólo los “iluminados” promotores de una democracia formal sin contenido, cegados por prejuicios antimilitaristas, podrían poner

en tela de juicio la legitimidad de la representatividad que posee Hugo Chávez. La historia nos dirá si el pueblo venezolano se equivocó o no, pero descalificar al presidente de Venezuela por su origen militar es inaceptable.

La democracia no es patrimonio de los civiles que, por cierto, en Venezuela, como en muchos otros países de América Latina, no sólo no la han sabido ejercer, sino que hasta la han prostituido, haciendo de la política un instrumento de ambiciones personales o sectoriales, con su consiguiente desprestigio y el de la función pública ante los ojos de la gran mayoría de la población.

Para bien o para mal, según los casos, las fuerzas armadas han cumplido un papel destacado en la política de América Latina. Resulta absurdo pretender mantenerlas al margen. Parece más sensato replantear su papel en las nuevas circunstancias.

Durante la revolución de 1905, Lenin advirtió la inquietud y perplejidad que los acontecimientos ejercían en el ánimo de los oficiales y soldados del ejército zarista. En su libro *La revolución democrática y el proletariado*, señalaba que después de la insurrección del acorazado *Pontemkin* grandes sectores de la oficialidad zarista (formada en parte por la nobleza) vacilaban en su fidelidad al zar, se amotinaban y se pasaban al campo revolucionario. Lenin consideraba ese hecho como un episodio fundamental para el destino de la revolución, y enseñó durante toda su vida que la clase obrera y el pueblo no pueden por sí solos tomar el poder sin una profunda crisis en los órganos de coacción y sin que parte de éstos se pronuncien por la causa revolucionaria.

Esto ocurría en la Rusia imperial, en el seno de la autocracia, donde la oficialidad provenía de familias y generaciones de terratenientes, donde todavía reinaba la servidumbre y donde los privilegios de casta y de clase revestían un carácter monstruoso. Ocurría en el ejército de un imperio que oprimía a más de sesenta nacionalidades, no en países como los de América Latina, donde los generales son nietos de inmigrantes o hijos de almaceneros.⁴

La centralización nacional del poder

La principal diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados no es el avance tecnológico, los volúmenes del producto interno bruto, el ingreso per cápita o la capacidad de decisión frente a los principales temas que afectan al mundo en su conjunto.

Todos estos factores, y muchos otros de igual o mayor importancia, son consecuencia de una diferencia esencial: la centralización nacional del poder, definida someramente como la capacidad de un país de instrumentar su política de manera soberana.

Es una verdad de Perogrullo que, ahora más que nunca, la gran revolución de las comunicaciones acentúa la interrelación mundial y hace que toda acción de importancia repercuta en escala internacional con distinto grado de trascendencia dependiendo del país que la genere, pero la revolución de las comunicaciones no tiene tanto tiempo y el fenómeno al que nos referimos se remonta al origen de nuestras patrias.

El carácter semicolonial (soberanía formal y subordinación real) de los países latinoamericanos determina que las fuerzas armadas estén sujetas a todo género de influencias. Sin embargo, como la debilidad histórica de nuestros países se manifiesta en la deficiente centralización nacional del poder, las fuerzas armadas, esencialmente centralizadas en su organización, se convierten en un objetivo clave de la política de dominación de las grandes potencias. Esto se volvió particularmente importante hoy, por varias razones:

1. En los países de América Latina, las dictaduras cívico-militares ya hicieron el trabajo sucio.
2. Ahora, el lugar de las dictaduras lo ocupan democracias formales que llevan a cabo la misma política: debilitamiento del papel rector del Estado, extracción de riqueza y concentración de la que queda en el minoritario grupo interno de aliados de los poderes hegemónicos.
3. Esta política de drástica concentración de la riqueza trae como inevitable consecuencia una crisis económica de la que deriva la protesta social.
4. El proceso histórico de dictaduras cívico-militares seguidas por seudodemocracias ha generado una clase política corrompida y carente de imaginación, salvo contadísimas excepciones, que no tiene capacidad de responder a la grave crisis.⁵
5. Lo que la propaganda de los países del centro del capitalismo mundial difunde como un problema esencialmente económico, un asunto “inevitable” consecuencia de la globalización, es en realidad el mismo proceso de explotación colonial de la periferia del mismo sistema, que se viene registrando desde hace siglos y cuyo procedimiento se adecua a los tiempos: en un principio

mediante la satrapía sangrienta y descarada de los corsarios, ahora a través de la elegante sofisticación de los tecnócratas neoliberales. El resultado es el mismo: los países empobrecidos (que no necesariamente pobres) garantizan el nivel de vida del primer mundo mediante, por ejemplo, la sangría de miles de millones de dólares por concepto de intereses de la fraudulenta e inmoral deuda externa.

El “peligro” interno

Las fuerzas armadas, brazo armado de un proyecto político que a través de su variable económica evidencia más crudamente su objetivo, son llamadas nuevamente a ser protagonistas como represoras de las manifestaciones sociales de la inconformidad. Ahora no es la excusa el comunismo, sino una realidad concreta: los cientos de millones de latinoamericanos hambrientos. Los grandes estrategas del poder mundial quieren soluciones drásticas y que otros se llenen las manos de sangre; si se matan entre compatriotas, mejor.

En tal contexto, las rebeliones de sectores militares, como el de los carapintada en Argentina o los bolivarianos en Venezuela, que no dejaron de obtener simpatía entre sectores populares, adquirieron un carácter original y peligroso para el proyecto político que comentamos, cuyos hitos más importantes son, hacia atrás, el golpe del general Pinochet y, en el presente, la “democracia” de los tecnócratas graduados en las universidades del primer mundo.

Las fuerzas armadas de aquí y allá

En una primera potencia, como Estados Unidos, donde el poder de la sociedad capitalista es altamente centralizado y su política internacional está rotundamente determinada por los intereses nacionales, donde existe una burguesía nacional interesada por el desarrollo de su país, las fuerzas armadas cumplen un papel complementario. Fueron el brazo armado de un proyecto nacional que consideraba, de una u otra forma, por la riqueza de una potencia económica en auge, el bienestar de toda la sociedad. Hoy, a pesar de que amplios sectores de la sociedad estadounidense están padeciendo las penurias del tercer mundo, este papel no se ha modificado... por ahora. La participación del ejército en los graves disturbios de 1992 en Los Ángeles fue un primer ensayo.

En América Latina, si dejamos de lado las particularidades de cada región y de algunos países en especial, las características fundamentales del papel de las fuerzas armadas han sido dos: haber participado en la fundación de la nación, un hecho esencialmente político, y su alianza ambivalente, unas veces con el pueblo (lamentablemente, las menos) y otras con la oligarquía vernácula.

La politización de las fuerzas armadas, una necesidad

Por razones materiales o de formación cultural, las clases dominantes de nuestros países han estado siempre ligadas estrechamente a los centros mundiales de poder. Tal relación, obviamente, determina que en la mayor parte de los casos estas minorías asuman como propios valores y puntos de vista que son esencialmente ajenos y hasta contrarios a los intereses de su propio país.

Si uno examina con detenimiento la historia de los golpes de Estado en América Latina, observa que la influencia de las oligarquías sobre las cúpulas de las fuerzas armadas es determinante. Detrás de cada Pinochet, de cada Videla, hay uno o más civiles que marcan el camino. Además, es materialmente imposible que cualquier estructura militar pueda conducir con mínima eficiencia los cientos de miles de puestos que exige el funcionamiento de la administración pública si no cuentan con el apoyo —y generalmente la dirección— de sectores políticamente organizados de la sociedad civil y, no pocas veces, de partidos políticos “democráticos” y hasta de “izquierda”. Por eso se hace imprescindible hablar de dictaduras cívico-militares, no militares a secas.

Las fuerzas armadas forman parte de la sociedad, no están al margen de ella ni son una sociedad aparte. Cada uniformado ve la televisión, sale de compras y tiene una opinión como cualquier ciudadano. Su formación militar no tiene por fuerza que aislarlo de la sociedad; si lo hace, es como resultado de una política pre-determinada que busca insensibilizarlo ante los problemas sociales para que pueda ser un buen represor de quienes se rebelan contra la injusticia y la violencia de los que ejercen el poder, reflejada en desocupación, corrupción e impunidad.

Si así no fuese, y se volviese a dar la comunión entre el pueblo y el ejército, ¿cuál sería el destino de las minorías que hoy concentran el poder y la riqueza?

Si bien existen –y son necesarias– normas que regulan la actividad política partidista de los militares, la politización –en su sentido más amplio, el del interés por los asuntos de la sociedad en la que se vive– de las fuerzas armadas es una necesidad imperiosa. Cada soldado debe tener plena conciencia de para qué empuña su arma; debe tener la formación histórica, política, económica y social que le permita discernir cuándo está sirviendo a los intereses de la nación y cuándo se convierte en mercenario de las minorías aliadas a intereses ajenos.

Quienes asumen el compromiso político de luchar por una sociedad realmente justa deben saber que para cualquier transformación radical de nuestros países, para bien o para mal, como lo confirma la historia, es necesario contar con la participación de las fuerzas armadas. Los defensores del statu quo las han sabido manipular aislándolas del pueblo y educándolas a favor de sus intereses. Quienes han tratado de eliminarlas han comprobado trágicamente su error. ¿No será hora de incorporarlas a la lucha por los verdaderos intereses de la nación?

Referencias

¹ Interesantes datos pueden recabarse sobre este tema en el libro *La guerra del siglo XXI*, de Lester Thurow, Buenos Aires, Vergara, 1992.

² Imperialismo, colonialismo, semicolonias, oligarquía, revolución, tercer mundo o subdesarrollo son términos “pasados de moda”, según la visión de los profetas del “fin de la historia” y sus ignorantes o interesados promotores, pero de absoluta vigencia conceptual para quien esto escribe. El hecho de que la revolución tecnológica haya permitido a quienes ostentan el control de la política mundial priorizar la televisión, la radio y los medios gráficos por sobre los misiles no quita que los fines y sus resultados sigan siendo los mismos. Ayer, la política del garrote; hoy, la “libertad del mercado”.

³ Jorge Abelardo Ramos, *El marxismo de Indias*, Barcelona, Biblioteca Universal Planeta, 1973.

⁴ Idem.

⁵ La camada de tecnócratas que viene gobernando en la mayoría de los países de la periferia del sistema capitalista mundial, desde los puestos más disímiles, se caracteriza por su profundo desprecio de la realidad nacional. Su educación, forjada mayoritariamente en las universidades de las principales capitales del primer mundo, los ha formado para ver la realidad del país que gobiernan desde la estratosfera, con la óptica que en los países hegemónicos se tiene de los nuestros. Así, mientras que no nos asombra que para un investigador o funcionario alemán, por ejemplo, el hambre de miles de latinoamericanos sea un dato estadístico más, sí nos debe indignar que dicha visión sea compartida por nuestros gobernantes.

Un problema de fondo, que merece ser tratado aparte, en profundidad, es que mientras en el pasado los intelectuales se ocupaban en asesorar a los gobernantes con ideas originales, hoy se han vuelto, con alguna que otra extraña excepción, justificadores del poder.

La Argentina no tiene hipótesis de conflicto; tiene un conflicto

Guillermo Hamlin

EL ASTILLERO RÍO SANTIAGO SIGUE SIENDO ESTATAL, PERO sobre él siguen operando las fuerzas enemigas. Un ejemplo—no el único— de esta continuidad es la saga de la fabricación de los POM (Patrulleros Oceánicos Multipropósito).

¿Qué son los POM? Son buques de 1.800 toneladas de desplazamiento de 80 metros de eslora, que pueden realizar tareas de patrullaje en el Atlántico Sur para control pesquero. Su sistema híbrido de propulsión les permite navegar a 6 nudos con una gran economía de combustible; esto les otorga una autonomía de 12.500 kilómetros con bajo costo. Si necesitaran acelerar, podrían superar los 20 nudos de velocidad. Para patrullaje extendido y veloz, cuentan con un helicóptero. Además, poseen dos gomones con motores fuera de borda para funciones de rescate o para abordaje de pesqueros ilegales. Tienen también un cañón en proa, de puntería óptica y 20 milímetros de calibre, y cuentan con dos ametralladoras de 12,7 milímetros para disuadir eventuales resistencias a su poder de policía. Poseen 45 camarotes para albergar a tripulantes y naufragos. Hasta aquí la versión patrullero, que puede cambiarse rápida y fácilmente a la versión bélica.

El cañón de proa de 20 milímetros de calibre se cambia por uno de 40 y pasa a ser operado por un radar de tiro, que a su vez es asistido desde el puente de comando con radares de alerta temprana. Sobre cubierta se agregan lanzaderas de misiles y torpedos. El helicóptero de rescate se equipa con sonar de arrastre y torpedos y se le agregan ametralladoras. Los gomones de rescate se equipan con dos motores de 85 caballos de fuerza y ametralladoras, y las tripulan buzos tácticos. En los camarotes, además de la tripulación, se alojan infantes de marina y buzos tácticos. Es decir, de patrullero se convierte en una corbeta o, como dicen los compañeros del astillero, “Dr. Jeckill and mister Hyde”. Ninguna de las dos personalidades es bien vista por el imperialismo británico, ni

por sus socios de la Unión Europea y Estados Unidos, ni por sus servidores locales.

El gobierno argentino adjudicó a Tandanor (sin experiencia ni pericia en construcción naviera) la construcción de los cuatro patrulleros, según trascendidos periodísticos, por un valor de 230 millones de dólares, superior en 100 millones a lo que había cotizado el Astillero Río Santiago en 2006 al Ministerio de Defensa, en momentos en que Ángel Cadelli era vicepresidente del astillero.

Ante la decisión del gobierno, los trabajadores del ARS no se quedaron quietos, y con Ángel Cadelli a la cabeza hicieron una oferta “hostil” repitiendo lo cotizado en 2006. Presentaron dicha oferta en el Ministerio de Defensa, en la Armada y en la provincia de Buenos Aires, según mandato de los trabajadores reunidos en asamblea en el área Buques Militares del ARS, acompañada por sendas notas firmadas por Ángel Cadelli. Destacamos que la oferta fue presentada sin el aval de las actuales autoridades del ARS y sin el apoyo de la conducción sindical. El compañero Ángel Cadelli impuso esta situación a la presidente Cristina Fernández de Kirchner, a quien solicitó su intervención mediante nota presentada el 1º de julio de 2010.

El compañero Martín Ayerbe, de la Mesa Nacional de la Agrupación MNL26, la tiene clara: “La Argentina no tiene hipótesis de conflicto; tiene un conflicto con Gran Bretaña, que ocupa nuestro territorio y ha instalado una base militar en Malvinas con medios bélicos ofensivos, como son los submarinos nucleares y los bombarderos”.

Agrega que “la causa de Malvinas es de un carácter popular, latinoamericano y antiimperialista; el imperio y sus colaboradores cipayos boicotean este proyecto. Si la privatización del Área Material Córdoba (fábrica militar de aviones) en manos de Lockheed Martin destruyó en los noventa la industria nacional en la aviación, la privatización de Buques Militares persigue, con iguales fines, el vaciamiento y la destrucción de ARS y la pérdida de la soberanía en Malvinas, Antártida y el Atlántico Sur”.

El proyecto original fue impulsado por el capitán Mouján de la ARA en el año 1996, para combatir la sobrepesca que se estaba dando en el Mar Territorial Argentino: de 294.000 toneladas en 1985, se pasó a 1.341.000 en 1997. Este proyecto fue asumido por los trabajadores del astillero; era una posibilidad de continuidad de trabajo porque, si bien en ese momento se estaban fabricando

otros buques de guerra para la ARA, el último de los cuales se finalizó en 2004, no había en cartera otros trabajos planificados. El ARS tiene una larga experiencia en producción de buques militares; entre ellos se destacan la BDT *Cabo San Antonio* (1978) y el destructor T42 *Santísima Trinidad* (1980), ambos utilizados en 1982 en la recuperación de Malvinas.

El gobierno actual forma parte de la partidocracia que tras la caída de Puerto Argentino pactó con el imperialismo y, a cambio de recomenzar la vida “democrática”, desmalvinizó, desarmó y desindustrializó a la Argentina. Siguen vigentes los tratados firmados en Madrid y Londres en 1990, que sellaron la paz en condiciones de sometimiento y en los que se concede a los ingleses facultades de control de los movimientos de las fuerzas armadas argentinas en el Atlántico Sur, se otorga trato privilegiado a los capitales británicos en el país y se resigna la jurisdicción argentina en controversias judiciales entre empresas británicas y el Estado nacional. Esta es la razón por la cual no cabe abrigar esperanzas de que el gobierno acceda al pedido de los trabajadores del ARS. Nada puede esperarse de la partidocracia ni de la burocracia sindical; forman parte del sistema.

Apoyamos plenamente, desde Socialismo Latinoamericano, la lucha de los trabajadores del ARS, y también lo hacemos con la lucha de los trabajadores ferroviarios, la de los trabajadores ex YPF y las de tantas agrupaciones de militantes que siguen creyendo en la lucha por la liberación nacional. El futuro, más cercano que lejano, nos encontrará a todos en un frente nacional antiimperialista.

Participación de los militares argentinos en el desarrollo industrial

Guillermo Hamlin

LOS MILITARES ARGENTINOS, LUEGO DE LA PRIMERA GUERRA interimperialista (que los países centrales denominaron primera guerra mundial), cayeron en la cuenta de que para poder cumplir acabadamente con su tarea profesional, esto es, la defensa nacional, era necesario desarrollar la industria de producción para la defensa e independizarse de su provisión del extranjero. También era necesario contar con provisión nacional de combustibles y lubricantes para abastecer a sus equipos y con tropas bien pertrechadas, en buenas condiciones físicas. Esto llevaba necesariamente al desarrollo integral de las actividades industriales, ya que una gran diversidad de ramas industriales sería necesaria para el abastecimiento de las instalaciones de producción para la defensa, y esto, a su vez, daría medios de subsistencia a vastos sectores de la población, que verían así mejorar su calidad de vida.

Este pensamiento llevó al general Enrique Mosconi, luego de años de brega, a consumir su obra cumbre: la fundación de Yacimientos Petrolíferos Federales (YPF), y al general Manuel Savio a la creación de Fabricaciones Militares.

En nuestro país, la decisión política de producir acero, base de toda producción industrial, fue tomada gracias a los esfuerzos del general Savio en la década de los cuarenta. Altos Hornos Zapla primero, SOMISA e HIPASAM después, son los grandes emprendimientos industriales encarados por el Estado nacional, a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares, ante la inexistencia de empresarios privados nacionales capaces de asumir el alto riesgo de cuantiosas inversiones de baja rentabilidad y lento retorno. Para lograr el desarrollo del sector siderúrgico –base de toda economía industrial–, el Estado nacional, además de su propia intervención directa tanto en la producción como en la planificación del sector, diluyó los riesgos empresariales privados para facilitar y contribuir a su capitalización y posterior operación.

El concurso de los ingenieros militares en el desarrollo tecnológico e industrial nacional fue notable. Surgen nombres importantes que se agregan a los de los generales Mosconi y Savio, como el general Baldrich, el brigadier San Martín, el almirante Castro Madero y tantos otros.

Podemos hacer una breve enumeración de la obra de los ingenieros militares a lo largo del siglo XX.

- El Arsenal Esteban de Luca, originalmente instalado en 1885, del cual derivó en 1936 la Fábrica Militar de Armas Portátiles y luego, en 1945, la Fábrica Militar de Materiales Pirotécnicos.

- La Fábrica Militar de Aviones en Córdoba, en 1926. Esto permitió que en 1946 la Argentina se convirtiera en el quinto país del mundo en desarrollar y construir con tecnología propia un avión caza de propulsión a reacción, el Pulqui I, detrás de Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Posteriormente, en 1951, bajo la dirección del brigadier San Martín y con la colaboración de técnicos alemanes, entre los que se destacaban Kurt Tank y Rudolf Galland, se desarrolló el Pulqui II, otro caza a reacción de diseño avanzado, equivalente a los mejores de ese entonces, el Sabre F86 de Estados Unidos y el Mig I de la URSS.

- En 1936, la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) y la inauguración de la Fábrica de Municiones de Artillería en Río III, Córdoba.

- En 1940, en Altos Hornos Zapla, Establecimiento Militar en Palpalá, Jujuy, donde se obtuvo la primera colada de acero a partir de mineral de hierro de las minas jujeñas.

- En 1942, la Fábrica Militar de Tolueno Sintético en Campana.

- En 1943, Industrias Químicas Nacionales, Sociedad Mixta.

- En 1944, la Planta de Elaboración de Cobre y sus Aleaciones (ECA) en Avellaneda, que en 1950 se denominó Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos.

- En 1944, ATANOR, Compañía Nacional para la Industria Química, Sociedad Mixta, en Munro.

- En 1947, la Fábrica Militar de Comunicaciones y Equipos, que en 1974 fue denominada Fábrica Militar San Martín.

- En 1947, la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina, Somisa, en San Nicolás.

- En 1948, el general Savio creó el Departamento Técnico, dentro de la DGFM, del cual derivó la Dirección de Investigación y Desarrollo, y luego, con el propósito de que sirviera para las tres fuerzas armadas, el 14 de enero de 1954 –por medio del decreto secreto 44I– se creó CITEFA, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas.

- En 1950 se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica; años más tarde, con el impulso del almirante Castro Madero, nuestro país alcanzaría un grado de desarrollo tal que lo llevaría a ganar licitaciones internacionales por calidad y precio para exportar tecnología nuclear en forma de reactores con fines medicinales.

- En 1952 se instaló la Fábrica Militar de Ácido Sulfúrico.

- En 1969, a partir del Astillero Río Santiago y de Fanazul, se crearon los Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE).

- En 1970, la Petroquímica General Mosconi.
- En 1971, la Petroquímica Bahía Blanca.
- En 1973, la Petroquímica Río Tercero.
- En 1975, Induclor.

Como muestra de la eficacia del sistema de producción para la defensa, basta relatar brevemente el caso del desarrollo del Tanque Argentino Mediano (TAM). Fue un esfuerzo concertado entre el Comando en Jefe del Ejército, CITEFA, la DGFM y sus plantas –Altos Hornos Zapla, SOMISA, Fábrica Militar San Martín, Fábrica Militar Río Tercero y Fábrica Militar de Materiales Pirotécnicos–, junto con algunas empresas privadas, para lograr el autoabastecimiento en este tipo de vehículos blindados. En junio de 1974 se puso en marcha el proyecto, y en diciembre de 1977 fue entregado al Ejército Argentino el prototipo uno –un plazo extremadamente corto para un desarrollo tan complejo como éste.

Esta enumeración de realizaciones no está completa, pero señala una continuidad en la construcción de la infraestructura energética, de industrias básicas y de producción para la defensa, que se vio interrumpida a mediados de los setenta

La idea del pueblo en armas, principio de una nueva concepción para la defensa nacional

39

Alex Obal

A PRINCIPIOS DE 2010, POR EL INCREMENTO DE LA inseguridad, circuló la idea –en una singular coincidencia entre sectores nacionalistas provenientes del peronismo y liberales progresistas– de instaurar el servicio militar obligatorio, a la vieja usanza de la Ley Richieri.

Los fundamentos de ambas posiciones son similares: las fuerzas armadas, por su organización, serían el único órgano estatal que estaría en condiciones de remodelar a las nuevas generaciones, díscolas por cierto, para que luego de un pasaje por los cuarteles, conscripción mediante, pudieran insertarse en la sociedad de una manera más disciplinada y respetuosa.

Es interesante esta coincidencia, que saca a la luz un tema acallado en forma total desde la eliminación de dicha ley por el menemismo, puesto que a través de estas iniciativas se abre un debate político cuya cuestión fundamental sería qué hacer con nuestras fuerzas armadas.

A pesar de la coincidencia entre sectores políticos tan antagónicos, la diferencia queda plasmada en los objetivos buscados. La finalidad del progresismo sigue siendo la misma que iniciara el alfonsinismo: reducir las fuerzas armadas a su mínima expresión posible: una mera guardia nacional alejada de todo aquello que involucre alguna concepción relacionada con la defensa nacional, para ser simplemente una institución más del Estado colonial, colaboradora de la democracia formal, en condiciones de solucionar emergencias sociales –incluyendo, si es necesario, sustentar el modelo mediante acciones represivas–. La única misión admitida hacia el “exterior”, en cumplimiento de la estrategia de Estados Unidos, sería oficiar como “fuerzas de paz”, con objeto de no desgastar a la soldadesca imperialista en tareas menores, como la de apaciguar y controlar la desesperación de un pueblo hambreado,

como el de nuestros hermanos haitianos, en una clara misión de restringir su soberanía.

Al no haber “hipótesis de conflicto”, lo que “restaría” de las fuerzas armadas debería justificar su presupuesto con cierta lógica de rentabilidad política para el sistema.

El nacionalismo, por el contrario, busca aumentar la incidencia de las fuerzas armadas en la política interna, con el fin de regenerar mágicamente un “ejército nacional” e industrialista que otrora tuvimos, desempeñando un papel protagónico en el advenimiento del peronismo; en la medida de lograr similitudes con el pasado, aumentan las posibilidades de “repetir la historia” de resurgimiento del Movimiento Nacional encabezado por el general Perón.

Este planteo no tiene en cuenta que los cuadros de las fuerzas armadas argentinas han sufrido el mismo tratamiento cultural y político que amplios sectores de nuestras capas medias, y que es imprescindible reconocer que la acción psicológica y cultural del imperialismo, por medio del control de los medios de difusión, ha logrado un triunfo cuyo reflejo más importante se manifiesta en la política desnacionalizadora desde 1976 hasta nuestros días.

Solamente con un frente nacional antiimperialista será posible revertir el pensamiento antinacional y antimilitarista hoy predominante en la Argentina, teniendo en cuenta nuestro pasado histórico y atendiendo las condiciones actuales para poder elaborar una estrategia de verdadera liberación nacional.

Requisitos esenciales

Como socialistas, no nos oponemos de ninguna manera al servicio militar obligatorio bajo un gobierno nacional y revolucionario sujeto a una posible agresión imperialista.

El servicio militar deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- a) Ser para ambos sexos.
- b) Ser para todos los ciudadanos en condiciones físicas de hacerlo, no tan sólo para los jóvenes.
- c) Ser de períodos cortos.
- d) Contemplar la instrucción del período individual, como manejo de armas, acciones de inteligencia, aptitud de enmascara-

miento, desplazamientos nocturnos y acciones rápidas de tipo comando, etcétera.

e) Toda la concepción táctica debe elaborarse bajo la idea de “pueblo en armas”, ya que no existe ninguna posibilidad de enfrentar a una coalición imperialista en el marco de una guerra convencional.

f) Coordinar movimientos a manera de desgastar al invasor moral, económica y psicológicamente teniendo en cuenta la ventaja objetiva del conocimiento del terreno y que el tiempo, cuanto más se prolongue la resistencia, favorece a nuestros planes.

g) El objetivo principal es formar cuadros políticos con conocimientos militares específicos.

Vietnam, Palestina, Afganistán e Irak, ejemplos a considerar

Entendemos que esta modalidad de servicio militar revolucionario no alcanza para derrotar a un enemigo objetivamente superior en medios bélicos. El alma de la resistencia no es tan sólo militar, sino fundamentalmente política; allí están como ejemplo los combatientes vietnamitas, palestinos, afganos e iraquíes: un pueblo que no esté dispuesto a defender lo que le pertenece —su cultura, su historia, su barrio, su escuela, sus recuerdos como síntesis de su dignidad personal y colectiva—, irremediablemente terminará siendo derrotado; sin un proceso revolucionario paralelo a la resistencia, no tendremos futuro como latinoamericanos libres.

El punto de inflexión político clave en la formación de un combatiente revolucionario es revertir el actual principio cultural de considerarse inferior; del otro lado hay también un hombre, que puede tener un armamento superior pero que se encuentra en territorio hostil, alejado de su modo de vida, con tanto miedo como cualquiera de nosotros, sin una claridad conceptual de a quién o qué representa.

Los hijos de la burguesía imperialista no participan en forma directa en la acción bélica: mandan, en representación de sus intereses, al pobrerío de sus propios países, y es allí donde se encuentra el talón de Aquiles del soldado invasor en relación con el combatiente del país invadido.

Tres décadas de desmalvinización, tres décadas de democracia colonial

Declaración de Socialismo Latinoamericano-Izquierda Nacional

CASI TREINTA AÑOS ATRÁS, LA GUERRA DE MALVINAS constituyó un conflicto antiimperialista que enfrentó a la Argentina semicolonial de entonces, gobernada por una dictadura cívico-militar que ejercía el poder valiéndose de prácticas terroristas, con una de las principales potencias del planeta, respaldada por el bloque de naciones centrales encabezado por Estados Unidos. Más allá de las intenciones de quienes precipitaron el conflicto bélico, totalmente sorprendidos –según sus propias declaraciones– por el desarrollo de los acontecimientos, la naturaleza del conflicto no puede ofrecer dudas para los argentinos. No las ofrece para los socialistas revolucionarios que tienen muy en claro una de las enseñanzas fundamentales del marxismo en una nación sometida a condiciones de atraso y dependencia: en el enfrentamiento entre una democracia imperialista y una dictadura cívico-militar reaccionaria, el deber de todos los patriotas está del lado del país que libra la batalla contra quienes integran el bando de los dominadores.

Ante todo, una derrota política

Este desfase entre la subjetividad de quienes estaban al frente de la Junta Militar (la idea de que Estados Unidos desempeñaría un papel mediador entre dos aliados privilegiados y que el gobierno conservador inglés no se embarcaría en un conflicto bélico) y la verdadera naturaleza de la guerra estableció las condiciones de la derrota, cuyo origen fue, ante todo, político. En ningún momento la dictadura cívico-militar tuvo en cuenta que para recuperar las Malvinas, por vía militar o mediante negociaciones, era imprescindible una política antiimperialista. Quienes habían practicado

—y practicaban— el terrorismo de Estado mantuvieron en todo momento el conjunto de ideas y creencias que los llevaron a sostener por las armas un programa contrarrevolucionario, destinado a destruir todo vestigio de país independiente. La permanencia al frente del Palacio de Hacienda de Roberto Alemán, representante del capital financiero internacional y de las corporaciones monopólicas, como antes lo había sido Martínez de Hoz, constituyó el presagio más claro del desenlace del conflicto.

Como no podía ser de otro modo, las consecuencias de la derrota política y militar comenzaron a pesar de un modo abrumador sobre el destino del país apenas cesó el tronar de los cañones. La política de desmalvinización fue la principal de esas consecuencias. En torno a esa política se organizó el conjunto de significaciones imaginarias —aquello que determinada sociedad en cierta época de su historia concibe como posible y realizable y aquello que desecha como impracticable— constitutivo de la subjetividad que habría de predominar en los años venideros. Su objetivo fue restablecer los mecanismos de dominación y hacerlos perdurables en el tiempo.

El verdadero significado del 2 de abril

Tras la caída de Puerto Argentino y el subsiguiente colapso de la dictadura cívico-militar, los círculos influyentes de la burguesía local y el capital extranjero comprendieron la necesidad de imprimir un giro al manejo de los asuntos públicos, así como al sentido de las construcciones simbólicas generales, en correspondencia con los nuevos tiempos que se avecinaban. En primer término, era imprescindible que la reconstitución hegemónica en curso bloqueara cualquier posibilidad de derivación al plano de la conciencia política del contenido antiimperialista que encerró el conflicto bélico, inconfundible a la luz del comportamiento de Gran Bretaña, Estados Unidos y sus aliados europeos.

Apuntando en esa dirección, la recuperación de Malvinas fue presentada como una decisión irracional, y los militares que la llevaron a cabo, demonizados. De acuerdo con el nuevo discurso, inspirado en usinas ideológicas del exterior, con amplia repercusión interna, constituía un verdadero despropósito que un país atrasado y dependiente pretendiese enfrentar militarmente a una potencia de primer orden. De forma tal, el 2 de abril fue explicado, en reiteradas ocasiones, como la obra de un borracho irresponsable. No

importó que hasta ese momento las guerras de liberación nacional en China, Vietnam o Argelia (así como hoy las presentes luchas de los pueblos en Palestina, Irak y Afganistán) hubiesen demostrado que la supuesta imposibilidad de enfrentar al colonialismo y al imperialismo constituía una falacia. En este sentido, también la guerra de Malvinas arrojó enseñanzas instructivas. Por ejemplo, en marzo de 1984 *The Economist* sostuvo que, sin ayuda de Estados Unidos, no sólo Gran Bretaña no habría podido ganar la guerra, sino que tampoco habría podido organizar la campaña militar. Asimismo, son abundantes los testimonios de origen británico sobre lo cerca que estuvieron de la derrota las fuerzas de su graciosa majestad.

En el marco de esta narrativa, construida en los años de posguerra, los soldados argentinos perdieron su condición de combatientes de una causa de carácter nacional y fueron presentados como “los chicos de la guerra”, criaturas inocentes arrojadas al infierno del conflicto militar en situación de indefensión por la ineptitud y la cobardía de una oficialidad incapaz de afrontar el peligro. No importaba que la proporción de bajas en los distintos rangos de las fuerzas armadas argentinas no probara en absoluto el relato desmalvinizador. Una mezcla de pacifismo, democratismo y antimilitarismo pequeñoburgués –de la cual el alfonsinismo fue la expresión política más decidida– impregnó los distintos aspectos de la vida política nacional y caló hondo en el ánimo de una clase media desmoralizada, base social necesaria para el discurso organizado en torno a la falsa antinomia democracia-totalitarismo. Fue bajo esta influencia que se aseguró la continuidad de las transformaciones de fondo iniciadas por el programa de Martínez de Hoz en 1976, y que han perdurado hasta el presente.

Pero, así como esa continuidad no está asegurada, ni mucho menos, el 2 de abril y la guerra en el Atlántico Sur recuperarán su lugar en una historia desmitificada, y servirán de punto de partida para la conformación de una conciencia nacional y para la gestación de un gran movimiento de masas democrático y antiimperialista orientado hacia la liberación de la patria y el socialismo.

Otros textos que pueden consultarse
en: www.izquierdanacional.org

De rodillas no se defiende la soberanía

Alex Obal

La defensa nacional no es asunto de “especialistas”

Alex Obal

Al filo de dos épocas

Oswaldo Calello

**Los crímenes de la dictadura deben
ser juzgados en la Argentina**

Oswaldo Calello

Las fuerzas armadas y la unidad nacional

Eduardo Paz Rada

**Cuando el error teórico-político conduce al
desacierto estratégico y éste a la derrota militar**

Gustavo Cangiano

Venezuela y Argentina: pueblo y ejército

Gustavo Cangiano

Ejército y revolución nacional

Gustavo Cangiano

Es hora de profundizar la Revolución Bolivariana

Daniel N. Moser